



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
21 de junio de 2007
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos 89º período de sesiones

Acta resumida de la 2442ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 23 de marzo de 2007, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Rivas Posada

Sumario

Observaciones generales del Comité (*continuación*)

*Proyecto de observación general No. 32 sobre el artículo 14 del Pacto
(continuación)*

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo y presentarse en forma de memorando. Además, deberán incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente período de sesiones se publicarán en un solo documento de corrección, poco después de finalizar el período de sesiones.



Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas.

Observaciones generales del Comité (continuación)

Proyecto de observación general No. 32 sobre el artículo 14 del Pacto (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev. 4) (continuación)

Párrafo 23 (continuación)

1. **La Sra. Motoc** señala a la atención del Comité un texto sobre los tribunales militares aprobado por la Comisión Internacional de Juristas en 2006. Aunque normalmente el Comité no retoma los textos de otros órganos, es importante aclarar que los tribunales militares no deben juzgar crímenes de genocidio, crímenes de guerra ni crímenes de lesa humanidad, pues la experiencia ha demostrado que no siempre llevan a cabo un juicio imparcial. Tal vez los demás miembros estén de acuerdo en incorporar esa referencia en el párrafo 23.

2. **La Sra. Chanet** dice que prefiere el texto como lo ha redactado el Sr. Kälin, es decir, con la palabra “normalmente”, pues la versión que Sir Nigel Rodley sugirió durante el debate anterior del Comité no especifica las condiciones concretas para el establecimiento excepcional de tribunales militares que juzguen civiles, lo cual constituye un problema, sobre todo a la luz de la observación general No. 29 sobre el artículo 4.

3. **La Sra. Wedgwood** señala que tradicionalmente los crímenes de guerra han sido juzgados por tribunales militares, como puede observarse en el artículo 84 del Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra. No está totalmente de acuerdo con la sugerencia de que los juicios de Nürenberg sean un ejemplo de lo contrario, como sugirió la Sra. Chanet durante el debate del día anterior, pues aunque esos tribunales tenían carácter internacional, actuaron como tribunales militares. Además, en Nürenberg no se juzgó exclusivamente personal militar. El texto del párrafo 23 es demasiado exclusivo, pues no sólo el personal militar ha sido juzgado por tribunales militares.

4. **La Sra. Motoc** dice que debe seguir precisándose el sentido de estado de necesidad, pues tiene más de una acepción aceptada en derecho internacional. El texto debe tener en cuenta el párrafo 16 de la observación general No. 29, donde se subraya que el artículo 4 del Pacto garantiza el derecho a un juicio imparcial incluso en situación de conflicto armado.

5. **El Sr. Shearer** está de acuerdo en que el proyecto de texto debe tener en cuenta la observación general No. 29. Quizá se pueda incluir una nota de pie de página sobre los estados de necesidad. Los tribunales que juzgan crímenes de guerra tienden a ser sui géneris, por lo cual no necesariamente entran en el ámbito del artículo 14, pero si se añade la frase “o cometido en un contexto exclusivamente militar” al final de la oración que comienza “el juicio de personal militar”, se cubriría esa posibilidad. Ese cambio preservaría la jurisdicción de los tribunales militares en algunos países para juzgar delitos que no son de índole exclusivamente militar.

6. **El Sr. Amor** dice que el párrafo 23 podría ser más específico sin referirse a los estados de necesidad y sugiere que, después de la tercera oración del texto en francés, se inserte la frase “*Un civil ne devrait pas être jugé par un tribunal militaire à moins que l'administration de la justice par ce dernier procède d'une manière équitable, impartiale et indépendante, compte dûment tenu de l'observation générale n° 29, lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles*”. Ese texto contemplaría diversas situaciones y evitaría una ruptura total con la jurisprudencia del Comité.

7. **La Sra. Wedgwood** responde a la cuestión planteada por la Sra. Motoc y dice que una crítica que podría hacerse a algunos códigos de justicia militar, incluido el de su propio país, es que no hacen referencia al genocidio ni a los crímenes contra la humanidad. Por tanto, esos crímenes son juzgados como crímenes civiles. El problema, si se afirma que un tribunal militar puede juzgar lo que, en la práctica son crímenes de guerra, pero no puede juzgar crímenes contra la humanidad o genocidios, es que las definiciones son siempre extremadamente técnicas. De hecho, la ventaja de los crímenes contra la humanidad, desde una perspectiva estrictamente judicial, es que no es necesario determinar la naturaleza o el estado de conflicto armado: los abusos sistemáticos contra civiles, incluso si se han cometido una sola vez, pueden considerarse crímenes contra la humanidad. La práctica del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia consiste en agrupar los cargos relacionados con crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, porque es muy difícil separarlos. Sería artificial tratar de hacer una distinción cuando los propios tribunales internacionales han considerado necesario ejercer discreción en la manera de formular los cargos relacionados con determinado delito.

El derecho internacional humanitario y el derecho de los conflictos armados se han refundido en cierta medida y ahora los crímenes contra la humanidad forman parte del derecho de los conflictos armados.

8. **La Sra. Chanet** dice que si el genocidio o los crímenes contra la humanidad no son cometidos por personal militar no hay razón para que el juicio esté a cargo de un tribunal militar. Sin embargo, cuando se trata de crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio podrían considerarse crímenes conexos y, por tanto, podrían ser juzgados por tribunales militares. La Sra. Chanet reitera que las instituciones de Nürenberg, que eran tribunales militares establecidos para resolver un conflicto armado dentro del marco de un acuerdo internacional, no entran en el ámbito del proyecto de observación general sobre el artículo 14. El actual proyecto está destinado más bien a mejorar la observación general anterior sobre el artículo 14 (No. 13), que toleraba el establecimiento de tribunales militares por cualquier razón, a condición de que éstos actuaran con imparcialidad e independencia como estipula el artículo. En el contexto de un país que no está en guerra ni en situación de emergencia, no hay realmente razón alguna para que los militares juzguen delitos no militares, excepto si el Estado desea ejercer su influencia y considera que los tribunales militares son una manera de encontrar jueces que tomen decisiones a su favor.

9. **Sir Nigel Rodley** dice que el juicio de civiles por tribunales militares y el juicio de personal militar por delitos de índole no militar son dos cuestiones que deben mantenerse separadas. Los problemas que se plantean cuando los tribunales militares juzgan personal militar no forman parte del ámbito del artículo 14; se relacionan más bien con la cuestión de la impunidad. Por tanto, apoya la sugerencia del Sr. Shearer de introducir una nota de pie de página. El Comité debe centrarse en la primera cuestión, que requiere un texto contundente, pues se trata de garantizar la justicia y no simplemente el derecho a un juicio imparcial. En cuanto a las razones imperiosas de necesidad, no se opone a la modificación del texto que propuso anteriormente. Sin embargo, señala que sólo en circunstancias muy excepcionales los tribunales especiales o los tribunales militares podrían tener jurisdicción para juzgar civiles o podría quitarse esa jurisdicción a los tribunales ordinarios porque no pueden administrar justicia. A menos que el Comité

considere que los tribunales militares no deben tener jurisdicción respecto de ninguna cuestión civil, en cuyo caso bastaría una simple referencia a la observación general No. 29, el texto debe enmendarse para aclarar que recaerá una pesada carga de la prueba en los Estados Partes cuya práctica de administración de justicia civil no se ajuste a la ordinaria.

10. **El Sr. Amor** considera preocupante la jurisdicción de algunos tribunales especiales, como la *Cour de sureté*, que juzgan delitos relacionados con la seguridad nacional. Las preocupaciones que suscita el hecho de que esos delitos sean juzgados por tribunales militares son legítimas, pero los tribunales civiles también pueden verse involucrados en política en esas circunstancias y, a fin de cuentas, carecer de credibilidad lo mismo que los tribunales militares. La *Cour de sureté* se caracteriza por su influencia política y tiene una historia de injusticia y parcialidad. Por tanto, los tribunales militares deben juzgar personal militar, pero en casos especiales, o cuando los acusados son personal militar y civiles, los tribunales militares deben poder ejercer la jurisdicción, a condición de que respeten las disposiciones del artículo 14 y, en circunstancias excepcionales, la observación general No. 29 sobre el artículo 4.

11. **El Sr. O'Flaherty** entiende las razones que explican el lenguaje utilizado para decir que el personal militar debe ser juzgado solamente por tribunales militares y en relación con delitos militares, y el deseo de evitar la impunidad, pero la frase resultante suscita preocupaciones legítimas, expresadas por la Sra. Chanet y el Sr. Shearer. Dada la prevalencia de las prácticas de derecho militar en todo el mundo, la frase tal como está induce a error y es inadecuada. En vez de incluirse en una nota de pie de página, la impunidad debe mencionarse en una frase que diga que los tribunales militares que juzgan personal militar deben ocuparse fundamentalmente de delitos militares y en ningún momento pueden invocar el derecho militar para justificar la impunidad.

12. No está de acuerdo con la opinión de que establecer un tribunal militar y luego obligarlo a cumplir el artículo 14 sea suficiente para que ese tribunal tenga la legitimidad necesaria para juzgar civiles. El onus de la demostración del carácter excepcional de las circunstancias, concretamente pertinentes para la categoría del caso que se trate, debe recaer sobre el Estado.

13. **Sir Nigel Rodley** dice que hay casos en los que la justicia militar es realmente preferible a los tribunales civiles especiales. La ventaja de estos últimos, sin embargo, es que, debido a su carácter público, puede determinarse si son imparciales e independientes, en tanto que los tribunales militares están camuflados. También es más fácil identificar las dimensiones políticas de la jurisdicción no militar. Propone, pues, que se reconozcan implícitamente dos o más niveles de excepcionalidad. En el primer nivel, los procedimientos de los tribunales penales ordinarios se modificarían a fin de permitir, por ejemplo, la obtención de pruebas mediante intervención de los teléfonos. En el segundo nivel, se daría protección a los tribunales especiales si hubiera peligro de intimidación de los miembros del jurado. El texto del párrafo debe permitir esos distintos grados de separación de la justicia ordinaria, y la justicia militar representaría el extremo superior de esas circunstancias excepcionales.

14. **La Sra. Chanet** subraya que el Estado debe justificar la decisión de no recurrir a los tribunales civiles y que la decisión no será aceptada cuando su objetivo sea obviar los requisitos del artículo 14. Será necesario evaluar cada caso por separado. La carga de la prueba debe recaer en el Estado.

15. **La Sra. Wedgwood** señala la nueva tendencia, que se tomó en cuenta al redactar el párrafo 23, a encomendar tareas militares a contratistas civiles. En la práctica, sin embargo, no se ha encontrado ninguna forma adecuada de garantizar la imparcialidad y la independencia de los tribunales militares que juzgan a esas personas, que suelen ejercer sus funciones lejos de su país de origen. Es necesario encontrar nuevas formas de enjuiciamiento, adaptadas a las dificultades prácticas de la situación. También advierte contra el peligro de que los tribunales militares penalicen erróneamente algunos actos, por ejemplo, que consideren la libertad de discurso como un acto de sedición.

16. **La Sra. Palm** está de acuerdo en que el juicio de civiles por tribunales militares debe tener carácter excepcional. Se necesita un texto más contundente a fin de que los Estados, además de tener la carga de la prueba, invoquen razones imperiosas. Señala asimismo la posibilidad de tribunales semimilitares y pregunta si entrarían en el ámbito del párrafo 23.

17. **El Sr. O'Flaherty** subraya que la impunidad no es una cuestión que entre en el ámbito del artículo 14. Está de acuerdo con la sugerencia de Sir Nigel Rodley de graduar las situaciones de excepcionalidad, pero teme que la cuestión sea difícil de redactar. El párrafo 24 incluye elementos pertinentes para ese proceso de gradación.

18. **La Sra. Motoc** dice que incluso cuando haya un estado de necesidad, deben establecerse principios que también sean aplicables a los tribunales militares.

19. **El Sr. Kälin** habla en calidad de relator del proyecto de observación general sobre el artículo 14 y dice que, aunque hay consenso sobre parte del párrafo 23, sigue habiendo algunos puntos que deben aclararse antes de preparar otro texto. En particular, en lo que respecta al juicio de personal militar por tribunales no militares, duda que una nota de pie de página, sobre una cuestión que reconoce que no entra en el ámbito del artículo 14, aporte una mayor aclaración. Una solución sería eliminar la última frase del párrafo.

20. Otra cuestión que debe resolverse es si los tribunales militares deben poder juzgar crímenes contra la humanidad y actos de genocidio. Está de acuerdo en que esos tribunales están especialmente bien preparados para juzgar crímenes de guerra, pues pueden determinar mejor la necesidad militar; sin embargo, no siempre es fácil diferenciar entre esos crímenes y los crímenes contra la humanidad. Por consiguiente sería mejor no hacer ninguna referencia a distintas categorías de crímenes internacionales.

21. Observa que hay acuerdo general respecto de que los civiles que realizan tareas militares pueden ser juzgados por tribunales militares, como en los tribunales militares de Nüremberg, donde esas personas se consideraron parte de la maquinaria de guerra. El Comité tal vez desee incorporar en el párrafo 23, después de las palabras “que no desempeñan funciones militares”, una frase que diga algo así como “o de algún modo íntimamente vinculadas a las fuerzas armadas”.

22. También parece haber acuerdo respecto de que la palabra “normalmente” en ese párrafo implica que hay excepciones: falta determinar cuáles son. Todos reconocen que cuando se invoca el artículo 4 (derogación en situaciones de emergencia pública), se podría justificar una excepción a la regla y los civiles podrían ser juzgados por un tribunal militar. Luego hay

otras situaciones, las que Sir Nigel Rodley ha denominado de imperiosa necesidad, que plantean el problema de determinar cuándo esos casos no entrarían en el ámbito del artículo 4 y si requieren la creación de una nueva categoría de semiderogaciones. La tercera posible excepción es el juicio de civiles por tribunales militares que den todas las garantías de imparcialidad e independencia. Sin embargo, ese es más bien un requisito, no una excepción.

23. **El Presidente** invita a los miembros del Comité a formular observaciones sobre las tres posibles excepciones a las limitaciones de la jurisdicción de los tribunales militares para juzgar civiles.

24. **La Sra. Chanet** está de acuerdo con la excepción del artículo 4. Con respecto a la segunda cuestión, la ampliación del texto como se ha sugerido entraña demasiados peligros. En cuanto a la sugerencia de que el tercer caso de excepción crearía una nueva categoría de derogación, el artículo 4 ya permite esas derogaciones: cuando los tribunales militares se consideran admisibles en virtud de circunstancias especificadas por el Estado, éstos deben cumplir el artículo 14.

25. **Sir Nigel Rodley** considera preocupante que después de las eliminaciones sugeridas el texto ya no haga ninguna referencia a la impunidad. Sugiere que se añada una frase que diga “teniendo presentes los riesgos de impunidad”. En vez de tratar de crear lo que el Sr. Kälin ha denominado una nueva categoría de semiderogaciones, preferiría que se hiciera referencia al artículo 4. Si no se menciona en absoluto la derogación, debe invocarse la necesidad como forma de garantizar una interfaz entre la justicia ordinaria y la justicia extraordinaria. Supone que el párrafo seguirá enunciando explícitamente que los tribunales militares no tienen jurisdicción para juzgar civiles.

26. **La Sra. Wedgwood** dice que la tercera frase propuesta por el Sr. Kälin es demasiado vaga y sugiere en cambio esta otra: “o que haya cometido crímenes relacionados con un conflicto armado”. En casos de conflictos armados en el extranjero, se aplicaría el artículo 4; en caso de ocupación militar, la necesidad de seguridad no dispensa de los requisitos del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra.

27. **El Sr. Amor** dice que el Comité no debe ser demasiado ambicioso y querer tener en cuenta todas las situaciones posibles. Incluso en un contexto puramente

militar, los principios fundamentales de justicia y el artículo 14 deben respetarse. La situación de civiles que cumplen funciones militares, o grupos paramilitares, o milicias armadas en un conflicto interno, constituyen una zona gris y no debe incluirse. El juicio de un civil por un tribunal militar podría ser aceptable en circunstancias excepcionales, pero los artículos 4 y 14 y la observación general No. 29 seguirían aplicándose.

28. **La Sra. Motoc** está a favor de una interpretación estricta del artículo 14 y conviene en que debería estipularse explícitamente que los tribunales militares deben ser imparciales e independientes y observar los mismos principios de justicia que los tribunales civiles. Además, considera que debe hacerse alguna referencia a la necesidad de evitar la impunidad. También podría añadirse una referencia al final del párrafo para subrayar la necesidad de que los jueces militares sean independientes de la jerarquía militar, lo cual establecería un vínculo con el párrafo siguiente, relativo a los “jueces sin rostro”. Con respecto al juicio de civiles por un tribunal militar, sugiere que el Comité estudie las actuaciones de la Corte Internacional de Justicia al respecto.

29. **El Sr. Shearer** dice que ha tomado nota de las observaciones de la Sra. Wedgwood sobre la administración de justicia en territorios ocupados de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra, pero considera que esas situaciones pertenecen al rubro de *lex specialis*, sobre todo la ley de conflictos armados. Quizá pudiera añadirse una nota de pie de página para aclarar que el párrafo no se aplica a situaciones de conflicto armado. En todo caso, sugiere que se aplazase el debate sobre el párrafo 23 hasta que el relator presente un nuevo texto.

30. **La Sra. Palm** dice que la cuestión básica es determinar si los tribunales militares sólo pueden juzgar civiles en el contexto de una derogación conforme al artículo 4, o si puede haber otras circunstancias excepcionales que lo justifiquen. En principio, sería preferible que la única excepción fuera el caso de derogación conforme al artículo 4, pero tal vez sea necesario prever otras posibilidades. De todos modos, está de acuerdo con el Sr. Shearer en que el Comité debe aplazar el examen del párrafo hasta que el relator presente un nuevo texto.

31. **El Sr. Iwasawa** apoya la eliminación de la cuarta frase del texto, relativa a los delitos ordinarios

cometidos por personal militar. Con respecto a los civiles que realizan funciones militares, prefiere el texto propuesto por la Sra. Wedgwood.

32. **El Sr. O'Flaherty**, en respuesta a la Sra. Palm, dice que si se limita el derecho de los tribunales militares a juzgar civiles a los casos de derogación conforme al artículo 4, ello podría en realidad, alentar a los Estados a declarar un estado de emergencia.

33. **El Sr. Johnson** dice que tanto el personal militar que haya cometido un delito de derecho común como los civiles que hayan cometido un delito de carácter militar deben ser juzgados por un tribunal civil. Recuerda que el Comité trató esa misma cuestión recientemente, cuando examinó el quinto informe periódico de Chile, y subrayó la necesidad de evitar excepciones a ese principio.

34. **La Sra. Motoc** señala que el Comité aún no ha examinado la cuestión de los tribunales basados en el derecho consuetudinario.

35. **El Sr. Kälin** desearía que el Comité examinara la cuestión de los tribunales de derecho consuetudinario antes de preparar una propuesta sobre el tema. Sugiere que se añada un nuevo párrafo sobre esos tribunales entre los párrafos 23 y 24, o en otra parte del proyecto de observación general.

36. **El Sr. O'Flaherty** sugiere que el Comité examine primero el párrafo 24 y luego vuelva a ocuparse de la cuestión de los tribunales de derecho consuetudinarios y que se inserte un nuevo párrafo al respecto en otra parte del texto.

37. **El Presidente** entiende que el Comité desea aplazar el debate sobre el párrafo 23.

Párrafo 24

38. **El Sr. Amor** dice que en algunas situaciones, reconocidas por el Comité en su jurisprudencia, se podría justificar el uso de “jueces sin rostro” por la necesidad de evitar la intimidación y amenazas que afectarían a las decisiones judiciales. El problema central es si existen o no mecanismos que garanticen la independencia e imparcialidad de esos jueces. En consecuencia, sugiere que al final de la primera oración del texto en francés se añada la frase “*dont l'identité et le statut ne sont pas vérifiés par une autorité indépendante*”. Esto implicaría que los “jueces sin rostro” serían aceptables en circunstancias extraordinarias.

39. **El Sr. Shearer** dice que la sugerencia del Sr. Amor es muy práctica. También sugiere que, en la segunda frase, en vez de “adolecen” diga “suelen adolecer”. Esos dos cambios reforzarían la idea de que los “jueces sin rostro” son aceptables sólo en circunstancias extremas y siempre que se mantengan todas las demás garantías de un juicio imparcial. La autoridad independiente a quien se confiaría la tarea de investigar a los jueces podría ser un ombudsman, por ejemplo.

40. **El Sr. O'Flaherty** está de acuerdo con las enmiendas propuestas, pero dice que el párrafo debe subrayar que los “jueces sin rostro” son aceptables sólo en circunstancias realmente extraordinarias y que el Estado Parte debe justificar esa medida. Debe también quedar claro que ninguna de las irregularidades mencionadas en el párrafo, ya sea en el contexto de un tribunal de “jueces sin rostro” o en cualquier otro contexto, debe constituir en sí misma una violación del Pacto.

41. **La Sra. Wedgwood** está de acuerdo con la enmienda sugerida por el Sr. Amor. Señala además que en algunos casos los miembros del jurado también pueden estar sujetos a presión o intimidación y pueden ser anónimos, por ejemplo, identificados sólo mediante números. Por tanto, pregunta si el texto también debe referirse al jurado.

42. **Sir Nigel Rodley** dice que la posición del Comité ha sido siempre la de considerar que los “jueces sin rostro” sólo son aceptables en casos realmente excepcionales. En el pasado, cuando el Comité determinó que el Pacto se había violado, había otras circunstancias además de los “jueces sin rostro”. Eso es lo que significan las palabras “en circunstancias como éstas” en la última oración. Con respecto a la sugerencia del Sr. Amor, está a favor de preparar un texto lo más claro posible, pero la cuestión de la independencia de los jueces incluye no sólo su condición sino factores como los incentivos que tengan o quién los elige, si el poder ejecutivo o el poder judicial, y eso no puede determinarse recurriendo exclusivamente a una autoridad independiente que verifique su condición. A su juicio, el Comité no debe dar la impresión de que, como quien dice, está asesorando sobre la mejor forma de hacer aceptable el uso de “jueces sin rostro”. Está de acuerdo con la adición sugerida por el Sr. Shearer, pero de todos modos considera que el texto debe quedar como está, implicando que el uso de los “jueces sin rostro” es

posible pero indicando que, según la experiencia pasada del Comité, los tribunales de “jueces sin rostro” están asociados a prácticas inaceptables.

43. **El Presidente** habla en su calidad de miembro del Comité y dice que la cuestión del anonimato de los jueces debe diferenciarse de las irregularidades enumeradas en la segunda oración del párrafo. La jurisprudencia del Comité revela que lo que llevó a concluir que se había producido una violación del Pacto no era el hecho de que los jueces fueran anónimos, sino otras irregularidades en las actuaciones de los tribunales presididos por “jueces sin rostro”. La segunda frase debe volver a redactarse para que esa distinción quede clara. La jurisprudencia del Comité se basa en casos de tribunales de “jueces sin rostro” en Perú y Colombia. Esos tribunales ya no existen, pues las respectivas cortes supremas determinaron su inconstitucionalidad, en gran parte debido a la conclusión del Comité de que no existían las garantías fundamentales de juicio imparcial estipuladas en el artículo 14.

44. **La Sra. Chanet** dice que la jurisprudencia del Comité es algo ambigua, pues no condena los tribunales especiales de “jueces sin rostros” en tanto tales, sino que señala otras irregularidades de procedimiento que socavaron su legitimidad. Para aclarar lo más posible las circunstancias en las cuales los “jueces sin rostro” serían aceptables, considera que bastaría la referencia al cumplimiento de las normas básicas de juicio imparcial, incluida en la frase final del párrafo 24.

45. **El Sr. Kālin** está de acuerdo en que las irregularidades de procedimiento enumeradas en la segunda frase del párrafo 24 no son necesariamente consecuencia del hecho de que los tribunales estén compuestos por “jueces sin rostro”. Por tanto, propone que se inserte la frase, “a menudo”, entre “sino también” y “de otras”.

46. No es seguro que convenga embarcarse en un examen de las circunstancias concretas en las cuales los “jueces sin rostro” serían aceptables, pues el párrafo 24, en su forma actual, se mantiene dentro del ámbito de la jurisprudencia del Comité y deja lugar a una evolución futura. Por la misma razón, tampoco es conveniente mencionar casos excepcionales.

47. En cuanto a la propuesta del Sr. O’Flaherty, dice que el resto del proyecto de observación general deja bien en claro que todas las irregularidades de

procedimiento enumeradas en el párrafo 24 serían en sí mismas violaciones del artículo 14 del Pacto, incluso si los tribunales no estuvieran constituidos por “jueces sin rostro”. Con respecto a las observaciones de la Sra. Wedgwood, no se opone a incluir una referencia al jurado, dado que sus miembros también podrían requerir protección contra amenazas e intimidación.

48. **La Sra. Wedgwood** dice que estaría dispuesta a proponer un texto sobre los miembros del jurado. En cuanto a la palabra “irregularidades” que figura en la segunda oración, señala que, en algunas circunstancias, “irregular” puede entenderse como “ilícito”. Por consiguiente, para no dar la impresión de que los tribunales especiales de “jueces sin rostro” son siempre ilícitos, sugiere que se elimine la palabra “otras”.

49. **La Sra. Chanet** se opone a incluir una referencia a los miembros del jurado, en particular porque el Comité no se ocupó de ningún caso de jurado “sin rostro”. En algunos países los miembros del jurado prestan servicios voluntariamente, y por tanto, personas en situaciones particulares podrían presentarse como voluntarios y aprovechar su anonimato para promover sus objetivos personales. Si no se aporta información sobre la identidad de los miembros del jurado es imposible determinar si son imparciales, y por tanto, aptos para cumplir esa función.

50. **La Sra. Wedgwood** dice que tal vez haya un mal entendido respecto de la expresión “sin rostro”. Los miembros del jurado nunca son totalmente anónimos —son entrevistados antes de ser elegidos y luego están presentes y visibles durante el juicio— pero es posible protegerlos manteniendo sus señas personales (nombre y dirección) en secreto. En respuesta a las observaciones de la Sra. Chanet, dice que no conoce ningún sistema jurídico en el cual los miembros del jurado puedan presentarse voluntariamente. También señala que en los sistemas de *common law* el jurado debe pronunciarse sobre cuestiones de hecho.

51. **El Presidente** señala que en español la denominación oficial no es “jueces sin rostro”, sino “jueces especiales” o “jueces excepcionales”.

52. **El Sr. Amor** recuerda que se plantearon dos cuestiones distintas en relación con el párrafo 24: la primera, cómo determinar la identidad y la condición de los “jueces sin rostro” y, la segunda, cómo eliminar las irregularidades de procedimiento que tienden a

impedir la administración de justicia, incluso cuando los jueces se puedan identificar perfectamente.

53. **Sir Nigel Rodley** señala que la preparación de una lista de criterios para garantizar la independencia e imparcialidad de los “jueces sin rostro” sería una tarea larga y difícil e, incluso, podría ser contraproducente, pues los Estados podrían usar la lista como base para elegir a esos jueces. El párrafo 24 y la jurisprudencia del Comité permiten implícitamente los tribunales especiales de “jueces sin rostro”, pero no sería conveniente codificar las circunstancias en las cuales están permitidos.

54. No está de acuerdo con la propuesta de la Sra. Wedgwood de eliminar la palabra “otras” porque, a su juicio, “irregularidades” significa actividades anormales, no ilícitas. Además, se opone firmemente a que se haga referencia a jurados anónimos, especialmente porque, al menos en el Reino Unido, los jurados se eligen al azar y cumplen sus funciones en forma prácticamente anónima. No es necesario legislar para prever una situación que, según entiende, nunca se ha producido.

55. **La Sra. Wedgwood** señala que ninguna de las irregularidades de procedimiento enumeradas en la segunda frase se justifican nunca, ni en teoría ni en la práctica. En ese contexto, la palabra “irregular” podría entenderse muy bien como ilícito. Si se elimina la palabra “otras” se disocian las irregularidades de procedimiento y los “jueces sin rostro”, y se indica así que en algunas situaciones los tribunales formados por esos jueces podrían permitirse. El proyecto de observación general debe establecer principios más que hechos, y, por tanto, no debe meramente resumir la jurisprudencia del Comité.

56. **El Presidente** señala que la jurisprudencia del Comité relativa a los “jueces sin rostro” se refiere a casos de sólo dos países, ninguno de los cuales tiene un sistema de jurado. Por consiguiente, no sería apropiado mencionar los jurados en el párrafo 24.

57. **El Sr. Iwasawa** apoya la propuesta de la Sra. Wedgwood de eliminar la palabra “otras” y excluir toda referencia a los miembros del jurado.

58. **El Sr. Bhagwati** pregunta si la lista de irregularidades que figura en la segunda frase debe mantenerse, especialmente porque la mayoría de ellas no puede justificarse en ninguna circunstancia.

59. **El Sr. Kälin** propone, como solución de transacción, que en la segunda oración se elimine la palabra “otras” y, en la versión inglesa del texto, se coloque una coma después de la palabra “irregularities” para que la frase diga “but also from irregularities such as”. A su juicio, la lista de irregularidades que figura en la segunda mitad de esa oración debe mantenerse porque indica claramente el carácter inaceptable de esos procedimientos. Por último, propone que se incorpore la sugerencia del Sr. Amor en la última oración del párrafo, que entonces diría: “los tribunales de ‘jueces sin rostro’, en especial en circunstancias como éstas, y si la identidad y la condición de esos jueces no ha sido verificada por autoridades independientes, no satisface las normas fundamentales ...”.

60. *Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.*

61. **El Presidente** dice que el Comité examinará la cuestión de los tribunales consuetudinarios en una fecha posterior.

62. **El Sr. Glélé Ahanhanzo**, apoyado por la **Sra. Chanet** y el **Sr. Amor**, señala que el proyecto de observación general no se refiere a la cuestión esencial de quién es responsable de garantizar la independencia del poder judicial.

63. **El Sr. Kälin** dice que podría incorporarse en el párrafo 17 una referencia a la garantía de independencia del poder judicial. Celebrará consultas con el Sr. Glélé Ahanhanzo para redactar un texto adecuado.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.